

**INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY  
241 DE 2013 SENADO, 193 DE 2012 CÁMARA**

por la cual se otorgan facultades extraordinarias pro t mpore al Presidente de la Rep blica para modificar la estructura y la planta de personal de la Fiscal a General de la Naci n y expedir su r gimen de carrera y situaciones administrativas.

Bogot , D. C., 15 de mayo de 2013

Se or

GUILLERMO LE N GIRALDO

Secretario Comisi n Primera Senado

Senado de la Rep blica

Ciudad.

**Referencia:** Informe de ponencia para primer debate al Proyecto de ley n mero 241 de 2013 Senado, 193 de 2012 C mara, *por la cual se otorgan facultades extraordinarias pro t mpore al Presidente de la Rep blica para modificar la estructura y la planta de personal de la Fiscal a General de la Naci n y expedir su r gimen de carrera y situaciones administrativas.*

De conformidad con el encargo que realizara la Mesa Directiva de la Comisi n Primera del Senado de la Rep blica, presentamos ponencia para primer debate al Proyecto de ley n mero 241 de 2013 Senado, 193 de 2012 C mara, *por la cual se otorgan facultades extraordinarias pro t mpore al Presidente de la Rep blica para modificar la estructura y la planta de personal de la Fiscal a General de la Naci n y expedir su r gimen de carrera y situaciones administrativas.*

**1. Antecedentes**

El Proyecto de ley n mero 241 de 2013 Senado, 193 de 2012 C mara, *por la cual se otorgan facultades extraordinarias pro t mpore al Presidente de la Rep blica para modificar la estructura y la planta de personal de la Fiscal a General de la Naci n y expedir su r gimen de carrera y situaciones administrativas*, fue radicado por la Ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella Correa, en la C mara de Representantes, d ndosele tr mite a la Comisi n

Primera el día octubre 26 de 2012, siendo aprobado en Comisión el día 5 y 12 de diciembre de 2012.

Fue aprobado en la Plenaria de la Cámara el día 17 de abril de 2013.

El día 24 de abril de 2013 fue recibido en la Comisión Primera del Senado el proyecto, designándoles ponentes el día 30 de abril de 2013 a los Senadores Karime Mota y Morad (Coordinadora), Jesús Ignacio García (Coordinador), Doris Clemencia Vega, Jorge Eduardo Londoño, Luis Carlos Avellaneda y Juan Manuel Corzo.

## **2. Consideraciones de los ponentes**

La implementación del Sistema Penal Acusatorio en Colombia produjo un cambio estructural en las tareas asignadas a la Fiscalía General de la Nación, pues no solo exigió el cambio de rol de los fiscales, sino también la implementación de un nuevo enfoque de política investigativa y de análisis de la criminalidad en nuestro país. Eso implica un **cambio integral del diseño institucional** que comprenda desde la visión orgánica y funcional de la entidad, hasta el proceso de formación de sus actuales servidores y de los futuros funcionarios.

Ese panorama exige enfrentar con mayor responsabilidad social el proceso de formación de los servidores públicos que desempeñan sus funciones en la Fiscalía General de la Nación, de tal manera que se formen grupos interdisciplinarios de personas con amplias capacidades cognoscitivas y pragmáticas al servicio de la defensa de los Derechos Humanos en la sociedad democrática y la descentralización de la formación académica.

**El gran crecimiento que ha experimentado la Fiscalía General de la Nación en los últimos años, ha creado necesidades de formación académica y capacitación**, de tal manera que se cuente con personal capaz de formular estrategias tendientes a obtener resultados positivos en la investigación criminalística, desde un punto de vista integral que abarque desde lo ético hasta lo profesional.

Este panorama demanda la necesidad de que nuestro Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se tecnifique formalmente y que nuestros investigadores

encuentren las herramientas para afrontar las grandes responsabilidades que imponen los nuevos sistemas de investigación y de análisis de la criminalidad.

**Es necesario, en consecuencia, crear un establecimiento público con el objeto de capacitar, formar y desarrollar, desde el paradigma de la investigación, la docencia y el aprendizaje, los conocimientos y las capacidades necesarias para enfrentar la nueva dinámica de la investigación y el proceso penal en todo el territorio nacional.** Es indispensable formar personas con competencias del saber investigativo y académico, la educación para el trabajo, el desarrollo humano y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Es importante ofrecer alternativas educativas de alta calidad, apoyar la investigación especializada en el marco del proceso penal, prestar asistencia académica para la modernización y transformación de la Fiscalía General de la Nación y ofrecer formación especializada para la gerencia institucional de distintas entidades públicas y en varias regiones del país.

Se busca fomentar el crecimiento académico en bachilleres e investigadores en criminalística, de tal manera que se conviertan en personas especializadas, altamente capacitadas y preparadas para enfrentar los cambios que se presentan en la justicia de nuestro país.

De igual manera, la creación del establecimiento público permitirá evidenciar y confirmar el compromiso que tiene el Estado colombiano de fortalecer la investigación de crímenes y de ofrecer programas de alta calidad con los cuales incrementa el nivel de preparación en el sector, generando mejores resultados de justicia. De igual manera, si se eleva a rango de establecimiento público, la escuela de capacitación de la Fiscalía General de la Nación tendría la posibilidad de ofrecer nuevos programas académicos, que hoy no ofrece el mercado, pero además tendría la autonomía y la capacidad logística y operativa para suscribir convenios con universidades nacionales y extranjeras, todo con el fin de fortalecer la investigación penal en nuestro país.

Por todas esas razones, se pretende que el Legislador extraordinario se encuentre plenamente facultado para crear un establecimiento público, que se encuentre adscrito a la Fiscalía General de la Nación, que cumpla los estándares

de la educación como un servicio público con función social, que se rija por las reglas constitucionales y todas las normas complementarias que desarrollen los objetivos de la capacitación, la educación y sus instituciones.

En este punto, resulta importante recordar que los artículos 69 y 70 de la Ley 489 de 1998, dispusieron que las entidades descentralizadas, como los establecimientos públicos, serán de creación legal, dirigidos a atender funciones administrativas y/o prestar servicios públicos, gozando de personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente.

Por esas razones, se buscará que el Congreso habilite al legislador extraordinario a crear un establecimiento público del orden nacional, adscrito a la Fiscalía General de la Nación, así como determinar su denominación, su funcionamiento y su estructura orgánica, de conformidad con las normas que regulan el sector educativo y el servicio público de educación.

No obstante, consideramos pertinente recordar que, al interpretar los artículos 150 y 189 de la Constitución en materia de límites entre las competencias atribuidas al Congreso y al Ejecutivo para crear, suprimir y escindir entidades públicas del orden nacional, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterada en afirmar que “La atribución para crear, suprimir y fusionar entidades públicas del orden nacional y para señalar sus objetivos y estructura orgánica, se radica en cabeza del Congreso de la República, el cual a su vez puede delegarlas en el Ejecutivo a través del otorgamiento de facultades extraordinarias, pues la delegación en tales materias no se encuentra dentro de las prohibiciones previstas en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política”.

De igual manera y, de manera particular para la creación de establecimientos públicos, la Corte Constitucional avaló el ejercicio de las facultades extraordinarias, al decir:

“A juicio de la Corte también les asiste razón al interviniente y a la vista fiscal cuando afirman que también los decretos expedidos con fundamento en facultades extraordinarias concedidas por el Congreso al Presidente de la República, pueden crear ministerios, departamentos administrativos,

superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional. Así, la expresión "o norma", contenida en la disposición que se estudia y que acusa la demanda, debe entenderse como referida a esos decretos, por lo cual no resulta contraria a las normas superiores. En efecto, la Constitución no prohíbe la concesión de facultades extraordinarias para tales efectos, como se deduce del texto del tercer inciso del numeral 10 del artículo 150 superior.

**De esta manera, tenemos claro que, en ejercicio de facultades extraordinarias, un decreto-ley puede crear un establecimiento público adscrito a la Fiscalía General de la Nación, para ofrecer nuevos programas académicos, como herramientas de fortalecimiento del nuevo enfoque de la investigación criminal que se requiere en el sistema penal acusatorio, que implica enfrentar la realidad de la criminalidad organizada y la nueva dinámica del delito.**

**El nuevo paradigma de investigación penal y la necesidad de adelantar un proceso de rediseño institucional**

El necesario rediseño institucional que comporta la efectiva implementación del Acto Legislativo número 01 de 2012, implica igualmente acoger un nuevo paradigma de investigación penal en Colombia, que permita adelantar investigaciones penales en contexto, vinculadas con fenómenos de macrocriminalidad, presupuesto esencial en todo proceso de justicia transicional. Sin duda, existe una clara relación entre el modelo de gestión de la investigación penal y la estructura orgánica de la Fiscalía General de la Nación.

En efecto, el actual modelo de gestión de la investigación penal no resulta apto para alcanzar los fines perseguidos con la reforma constitucional, por cuanto es manifiestamente incompatible con los instrumentos de justicia transicional. Lo anterior, por las siguientes razones:

**La primera:** El modelo vigente, fundado en que todas las demandas de justicia deben ser atendidas por la administración de justicia al mismo tiempo y de igual forma, sin tomar en cuenta criterios materiales diferenciales, tales como, entre otros, la calidad y el interés de la víctima, el grado de responsabilidad del investigado, la clase de delito de que se trate, el impacto que la conducta criminal,

produjo, en la práctica, resultados manifiestamente inequitativos en términos de goce efectivo de los derechos sustanciales de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como del derecho de los investigados a ser procesados en un plazo razonable, al igual que a satisfacer el derecho a la verdad de la sociedad en su conjunto.

**La segunda:** Hoy por hoy, si bien teóricamente todas las demandas ciudadanas de justicia son atendidas de igual forma, en la realidad, existen ciertas prácticas administrativas, no reguladas formalmente, caracterizadas por i) su ausencia de transparencia; ii) estar desarticuladas; iii) no ser democráticas; iv) carecer de controles efectivos, y v) no estar vinculadas con la ejecución de una estrategia global de investigación, las cuales conducen a una atención diferenciada entre las mencionadas peticiones, sin que exista una justificación racional y legítima para ello.

**La tercera:** El modelo de gestión judicial según el cual todos los delitos deben ser investigados al mismo tiempo, de igual forma, y además, como conductas aisladas, impide la creación de una verdadera política criminal que se materialice en el diseño e implementación de unas estrategias que conduzcan a combatir, de manera eficaz, diversos fenómenos de crimen organizado relacionados con la evolución del conflicto armado interno (v.gr., delitos sexuales, reclutamiento de menores de edad, ejecuciones extrajudiciales, homicidios agravados, despojo de tierras, desplazamiento forzado, desaparición forzada, secuestro, etcétera), el tráfico de estupefacientes, la corrupción administrativa, la destrucción del medio ambiente. Se precisa, en consecuencia, crear instrumentos de una nueva política criminal enfocados a enfrentar los siguientes desafíos: i) hacer frente al fenómeno de masividad de los crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado interno, y ii) demostrar las conexiones existentes entre las diversas manifestaciones del crimen organizado y distintos estamentos de la sociedad colombiana.

**La cuarta:** La actual investigación aislada de conductas delictivas tampoco permite desvertebrar de manera eficaz y eficiente a las numerosas organizaciones criminales que cometen toda suerte de delitos comunes (v.gr., fleteo, hurto de

vehículos, desfalcos financieros, etcétera). De igual manera, ha impedido que la actividad investigativa de la Fiscalía se focalice en la persecución de ciertos delitos que, si bien no son perpetrados por organizaciones delictivas sí producen un alto impacto social, dada su particular gravedad en términos de afectación de los derechos fundamentales de la víctima, de otros bienes jurídicamente amparados o por el hecho que develan la existencia de patrones culturales discriminatorios.

**La quinta:** La ausencia de unos criterios de priorización transparentes que permitan focalizar y articular el funcionamiento de las distintas Unidades Nacionales de Fiscalías, así como de las Direcciones Seccionales, e igualmente, que conduzcan a orientar las actuaciones investigativas de aquellas hacia la consecución de unos objetivos generales de política criminal, impide que se develen las verdaderas dimensiones socio-políticas del crimen organizado que han afectado al país. En efecto, la dispersión de las investigaciones y de la información disponible, ha impedido, en muchos casos, que salgan a la luz pública no sólo la conformación orgánica del grupo ilegal y sus dimensiones criminales y militares, sino también aquellas de orden social y político. En otras palabras, el modelo actual de gestión de la Fiscalía General de la Nación, carente de unos criterios transparentes de priorización, ha impedido que la actividad investigativa se enfoque hacia los máximos responsables de los fenómenos de macrocriminalidad.

**La sexta:** En la actualidad, el paradigma según el cual todos los delitos deben ser investigados al mismo tiempo, de igual forma y como hechos aislados, ha conducido a elevados índices de impunidad, por cuanto los escasos recursos económicos, administrativos, logísticos y de personal con que cuenta la Fiscalía General de la Nación no son direccionados de forma estratégica hacia la consecución de unos objetivos generales. Tal estado de cosas, además de afectar gravemente el disfrute de los derechos de las víctimas, ha producido diversas disfuncionalidades del sistema, como son, entre otras, las siguientes: i) una misma organización delictiva está siendo investigada por diversas Unidades Nacionales y Direcciones Seccionales (v.gr., bloques de autodefensa o frentes de la guerrilla); ii)

otro tanto sucede con el examen de las situaciones (v.gr., casos de desplazamientos masivos); iii) idéntica conducta delictiva viene recibiendo diverso trato en las distintas Fiscalías Delegadas (v.gr., delitos sexuales) y iv) un mismo supuesto fáctico ha sido investigado por, al menos, dos Fiscalías Delegadas, con resultados contradictorios.

Ejemplos prácticos ilustran este problema: Las conductas cometidas por un reconocido integrante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, durante los años 1997 a 1999, fueron investigadas, al mismo tiempo, pero en forma autónoma, por cuatro Unidades Nacionales (Justicia y Paz, contra el Terrorismo, contra el Desplazamiento Forzado y desmovilizados), cuatro fiscales adscritos a la Dirección Seccional de Santa Marta y un fiscal adscrito a la Dirección Seccional de Pasto. Obviamente esta situación desarticula las investigaciones, facilita la impunidad y dificulta obtener la verdad, justicia y reparación de las víctimas. De igual manera, los casos de los desplazados de los municipios de Curvarandó y Jiguamiandó están siendo investigados por las tres unidades nacionales y algunos se encuentran en las Direcciones Seccionales.

**La séptima:** El modelo actual de gestión de la Fiscalía General de la Nación, fundado en la atención de casos individuales, va en contravía de los nuevos paradigmas y tendencias vigentes en la región[22][22]. En efecto, la resolución de un caso concreto es sólo una de las funciones que debe cumplir un órgano de investigación criminal. Lo anterior por cuanto ``además de buscar el cumplimiento de la ley en cada caso, los fiscales deben incorporar en su definición de **metas**, todos aquellos otros objetivos sociales que se espera que se produzcan por medio de la persecución del conjunto de casos que aborda o de algún grupo de ellos. Entre estos objetivos debieran estar algunos como los de conseguir que la persecución se haga con **costos razonables** para el Estado, mejorar la confianza del público en las instituciones del Sistema de Justicia Penal, contribuir en la disminución del delito, entre otras¿¿ [23][23]. Como puede observarse, acoger un paradigma tradicional de investigación, centrado únicamente en la resolución del caso concreto, dificulta alcanzar objetivos globales de la Institución e impide la



realización de planificaciones estratégicas más generales de lucha contra la criminalidad.

**La octava:** Los sistemas de evaluación de los fiscales, soportados sobre casos individuales e indicadores cuantitativos, conduce a resultados perversos tales como: i) atención prioritaria a los procesos que se consideran viables, y ii) imposibilidad de alcanzar resultados estratégicos institucionales.

**La novena:** El proceso de paz que se inicia con las guerrillas colombianas requiere de una modificación en la Administración de Justicia que se adapte a las necesidades de la justicia transicional. El escenario jurídico para tal fin se encuentra en el ``Marco Jurídico para la Paz'', que en sí mismo permite y fomenta una política de priorización y selección de casos.

Por lo tanto, es claro que la investigación criminal en contextos y la creación de criterios objetivos y transparentes de priorización son dos caras de la misma moneda, particularmente en la situación de justicia transicional en la que se encuentra hoy Colombia.

#### **ii) Urgencia del diseño de una planta de personal adecuada para contextualizar y priorizar las investigaciones penales**

El cumplimiento de los retos que implica la implementación del Acto Legislativo número 01 de 2012, comporta introducir algunas reformas a la estructura orgánica actual de la Fiscalía General de la Nación, en especial, la urgente creación de una nueva Unidad Nacional de Análisis y Contextos. Sus fundamentos son los siguientes:

Seguridad ciudadana. La posibilidad de asociar casos a raíz de sus elementos comunes y de desarticular las bandas criminales es uno de los mayores aportes al mejoramiento de la seguridad en el país.

Conocimiento del contexto de conflicto armado para una negociación de paz. La construcción de los escenarios delictivos en todas sus dimensiones es necesario para saber cómo abordar un proceso de paz.

El fortalecimiento del proceso de Justicia y Paz. En la actualidad, es necesario oxigenar el proceso de justicia transicional para alcanzar los objetivos

originalmente propuestos, completando los distintos contextos criminales en los cuales delinquieron los frentes desmovilizados.

Eficiencia y legitimidad en la administración de justicia. La racionalización del recurso humano y la priorización de situaciones permite que se administre justicia con eficiencia y transparencia a la ciudadanía, lo que a su vez permite reducir el nivel de impunidad.

Exigencias de la sociedad civil. Los representantes de los distintos sectores de la sociedad han planteado la necesidad de estudiar la criminalidad en su contexto, para así desarticular de manera más efectiva a los grupos que amenazan contra los Derechos Humanos. Los distintos representantes de la sociedad civil, en particular las organizaciones no gubernamentales defensoras de los Derechos Humanos, han venido reclamando, a través de distintas reuniones con la Fiscalía General de la Nación, la puesta en marcha de una política criminal que permita la creación de los contextos macrocriminales en los cuales ocurrieron las violaciones graves y masivas de los Derechos Humanos.

En este orden de ideas, se destacan tres foros específicos: 1. El taller llevado a cabo el día 5 de julio de 2012, en el Hotel Marriot de Bogotá, en el cual participaron más de sesenta representantes de las distintas organizaciones sindicales y voceros de la sociedad civil en diálogo con la Fiscalía General de la Nación. 2. La reunión de la Mesa Nacional de Garantías en la cual participaron los Ministerios de Justicia e Interior, y donde se hizo un llamado expreso a la investigación criminal en contexto, y 3. La reunión sostenida el día 31 de agosto de 2012 entre los sindicatos de trabajadores, el Ministerio del Trabajo y la Fiscalía General de la Nación, donde una vez más se resaltó la necesidad de priorizar situaciones basándose en investigaciones contextuales. En todos los escenarios, el nuevo modelo propuesto por la Fiscalía General de la Nación ha recibido un gran apoyo a raíz de los grandes resultados que puede ofrecer, especialmente en los casos de violencia contra sindicalistas y defensores de los Derechos Humanos.

No obstante, en la actualidad, el ente investigador no cuenta con una unidad especializada en análisis que le permita crear los contextos criminales y

desentrañar los fenómenos delictuales de la macrocriminalidad, por lo cual se hace necesario suplir el vacío técnico y humano a través de una ampliación de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación para la creación de dicha unidad que pueda ser constituida por los profesionales de los más altos perfiles requeridos. La propuesta de Unidad Nacional de Análisis y Contextos (UNAC), por lo tanto, responde a las necesidades de la Administración de Justicia, del conflicto armado, y del actual proceso de paz.

**b) Dificultades de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación.  
Necesidades de modificarla estructura orgánica y funcional de la entidad**

De manera general, las siguientes características identifican la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación:

Es global y flexible .

Tiene una estructura rígida en algunos aspectos y flexible en otros, pues la ley ha creado algunas unidades y cargos, pero también ha autorizado a trasladar algunos cargos.

La estructura orgánica no presenta cambios de fondo desde la creación de la entidad.

Ha crecido en forma coyuntural y desordenada.

Presenta desigualdad en los niveles salariales y prestacionales.

Predominantemente técnica.

Presenta falencias y debilidades de cobertura del territorio.

Ahora pasaremos a explicar las principales dificultades de la planta que exigen regulación legal urgente:

**i) La estructura orgánica y funcional de la Fiscalía no ha variado, pese a los cambios**

Pese a que, a lo largo de 20 años de funcionamiento, la Fiscalía General de la Nación ha tenido que afrontar varios cambios normativos que aumentaron considerablemente su personal y ha sido objeto de asignación de nuevas responsabilidades en respuesta a las cambiantes circunstancias del país, su estructura orgánica se mantiene prácticamente igual.

En consecuencia, al solicitar facultades extraordinarias para modificar la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación, no sólo se pretende modernizar su funcionamiento, adecuar la gestión investigativa a las necesidades cambiantes, crear nuevos cargos, suprimir otros, incluir nuevas funciones sino, en general, definir una forma de estructura de organización con especialización de funciones y eficiencia en los servicios a cargo de la entidad.

**ii) La organización de la planta de personal de la Fiscalía es urgente y necesaria**

Uno de los aspectos fundamentales del proceso de reestructuración de la Fiscalía está asociado con el **Crecimiento desordenado y desarticulado de la planta de personal.**

En 20 años de funcionamiento, la entidad aumentó su número de trabajadores en un 150% (se inició con 10.509 cargos y hoy son 25.588 servidores). No obstante, el crecimiento no fue planificado, pues se originó en respuestas legales coyunturales que encontraban como solución al problema de impunidad el aumento de personal para la Fiscalía. Desde la implementación del Sistema Penal Acusatorio se han expedido **12 normas [26][26]** con fuerza material de ley que reforman la planta de personal de la Fiscalía para introducir nuevos cargos, pero en forma aislada y desarticulada. Veamos:

La planta de personal de la Fiscalía General de la Nación ha cambiado a partir de su creación de la siguiente forma:

El 30 de noviembre de 1991 se expidió el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación mediante Decreto-ley 2699, el cual en su artículo transitorio 1°, autorizó al Fiscal General por única vez para crear los cargos que requiriera la Entidad para ejercer sus funciones. Con base en estas facultades, se expedieron las Resoluciones números 00013 y 00015 de 1992, creando 10.509 cargos.

Hasta el año 1999 se crearon cargos en la planta de la entidad, hasta llegar a un total de 20.120, con base en el artículo 11 del Decreto número 2699 del mismo año, el cual dice: ``En desarrollo de sus funciones, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura coordinarán sus actividades para el

eficiente y eficaz desempeño de la Administración de Justicia corresponde al Consejo Superior de la Judicatura a iniciativa del Fiscal General crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos de la Fiscalía, estableciendo denominaciones específicas dentro de la nomenclatura de empleos y la escala de salarios.

A lo largo de su creación la Entidad ha visto fortalecida su planta de personal de acuerdo a las circunstancias políticas enmarcadas en los diferentes Planes Nacionales de Desarrollo. A continuación se presenta el cuadro que contiene las transformaciones de cargos de la Fiscalía General de la Nación durante los últimos 8 años.

MODIFICACIONES EN LOS CARGOS FGN DE 2004 A 2012		
NORMA	OBSERVACIÓN	TOTAL
Ley 938 de 2004	Estatuto Orgánico FGN	18.500
Resolución número 0-6645 de 2004	A partir de la Ley 938 fueron enviados algunos cargos al Consejo Superior de la Judicatura.	-118
Ley 975 de 2005	Ley de Justicia y Paz. Adiciona cargos	275
Ley 1151 de 2007 - Decreto número 122 de 2008	Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Código de Infancia y Adolescencia, Protección a Víctimas y Testigos.	1.412
	Planta transitoria - Justicia y Paz	753
Ley 1424 de 2010 - Decreto número 2248 de 2011	Derechos Humanos y Desmovilizados	726
Ley 1444 de 2011 - Decreto número 4059 del 31 de octubre 2011	Incorporación de servidores del DAS	3.218
Ley 1453 de 2011 - Decreto número 4883 del 22 de diciembre de 2011	BACRIM - Medio Ambiente - Consolidación Territorial	822
<b>CARGOS TOTALES A SEPTIEMBRE 30 DE 2012</b>		<b>25.588</b>

d) El ajuste de perfiles y la profesionalización de la Fiscalía es conveniente, urgente y necesaria

i) Análisis de la Planta de cargos por nivel

En virtud de lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución número 2-4145 del 29 de diciembre de 2011, la Fiscalía General tiene clasificados los cargos por niveles, de acuerdo con la naturaleza general de las funciones, grado de responsabilidad y autoridad, de la siguiente manera:

**Nivel Directivo:** Es el que cumple funciones de dirección, coordinación, determinación de política, planes y programas direccionados al cumplimiento de la misión de la Fiscalía General de la Nación.

**Nivel Asesor:** Le corresponde asistir, dictaminar y asesorar al nivel directivo, controlar el cumplimiento de las políticas, planes y programas adoptados por la Fiscalía General de la Nación.

**Nivel Ejecutivo:** Sus funciones comprenden la ejecución, coordinación, supervisión y control de las actividades de las diferentes dependencias de la Fiscalía General de la Nación.

**Nivel Profesional:** Realiza funciones cuya naturaleza demanda la aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional reconocida por la ley.

**Nivel Técnico:** Le corresponde el desarrollo de funciones que requieren un nivel de preparación técnica especializada, y que prestan apoyo en la ejecución de tareas de esa naturaleza.

**Nivel Asistencial:** Corresponde a los empleos que ejecutan funciones complementarias o auxiliares, presta colaboración y apoyo no especializado.

La distribución de los 25.588 cargos actuales por Nivel se presenta en la siguiente tabla:

Nivel	Fiscalía	CTI	Adtiva.	Total	Peso
Directivo	3	3	5	11	0,0%
Asesor			24	24	0,1%
Ejecutivo	29	92	26	147	0,6%
Profesional	4.497	435	986	5.918	23,1%
Técnico	5.133	6.600	422	12.155	47,5%
Asistencial	3.099	1.831	2.403	7.333	28,7%

Total	12.761	8.961	3.866	25.588	100,0%
-------	--------	-------	-------	--------	--------

### 3. Proposición

Por las anteriores consideraciones, solicito a los miembros de la Comisión Primera del Senado de la República, dar primer debate al Proyecto de ley número 241 de 2013 Senado, 193 de 2012 Cámara, *por la cual se otorgan facultades extraordinarias pro t  pore al Presidente de la Rep  blica para modificar la estructura y la planta de personal de la Fiscal  a General de la Naci  n y expedir su r  gimen de carrera y situaciones administrativas*, de conformidad con el texto aprobado en la Plenaria de la C  mara de Representantes.